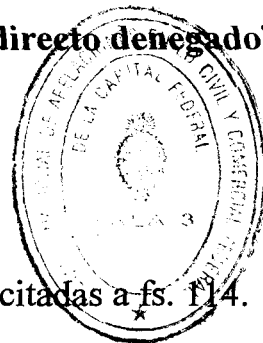


**Causa N° 6302/11 “Asociación Anestesia Analgesia y Reanimación de Bs.
As. s/ recurso de queja por recurso directo denegado”**



Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.

Por recibidas las actuaciones administrativas solicitadas a fs. 114.

AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (en adelante la Asociación) interpuso, en los términos del art. 476 del Código Procesal Penal, recurso de queja desde que por Resolución CNDC N° 66/11 (del 24-8-2011; ver copia de fs. 87/94) se denegó la apelación deducida contra la Resolución N° 42/11 (del 24-5-2011; fs. 69/75).

En esa última decisión, el organismo dispuso modificar la redacción del art. 2° de la Resol. 38/11 del siguiente modo: “Posponer para el día 26 de mayo de 2011 a las 11:00 horas la constitución, en la sede de la AAARBA [...] a fin de producir la prueba pericial contable solicitada por esa entidad” (art.1°). Asimismo, hizo saber a la Asociación que la designación del perito de parte podía ser efectuada el 26 de mayo a la hora indicada (art.2°).

2. Dentro del objeto de la queja, la recurrente solicita la nulidad absoluta de la resolución denegatoria de la apelación, y de todo lo actuado desde la resolución del 8-5-2003 en la que se le confirió el traslado del art. 29 de la ley 25.156, por entender que la CNDC no tiene competencia para su dictado, de acuerdo con la doctrina fijada por la Corte Suprema en “Credit Suisse” y por esta Sala en las causas “AMX” (4537/10 del 10-12-2010), “SADAIC” (3839/10 del 21-12-2010) y “Fresenius” (10.507/09 del 13-5-2010).

En subsidio, pide que se declare admisible el recurso de apelación. Después de efectuar una reseña de los antecedentes del caso, funda la crítica de la resolución denegatoria en que no se encuentra firme la Resolución 78/10 del 15-6-2010 que dio por concluida la instrucción sumarial y ordenó el traslado del art. 32 de la LDC (Pto. V, fs. 106vta./107). A partir de ello, concluye que son nulas todas las resoluciones dictadas con posterioridad.

3. En los términos en que ha sido fundada, la queja no es admisible.

USO OFICIAL

Como primera cuestión, es oportuno señalar, respecto de la nulidad del traslado del art. 29 de la ley 25.156 dispuesto el 8 de mayo de 2003, que -sin perjuicio de la cantidad de actos posteriores que no fueron oportunamente impugnados (ver fs. 359/75 y siguientes del expediente administrativo mencionado)- el planteo excede la jurisdicción que le corresponde a este Tribunal con motivo de la queja interpuesta por haberse denegado la apelación contra la citada Resol. 38/11 del 11 de mayo pasado.

Por lo demás, los precedentes de esta Sala -que la recurrente cita- no son aplicables al caso concreto, desde que las circunstancias sobre cuya base se dictaron son distintas a las que se presentan en esta oportunidad. En los fallos invocados no se decidió acerca de la facultad de la CNDC para disponer el traslado de la denuncia o de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento de oficio, en los términos del art. 29 de la ley 25.156. En la causa 4537/10 se consideró que la desestimación *in limine* de una denuncia y la orden de archivo excedía las facultades instructorias de la CNDC de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema *in re* "Credit Suisse" (Fallos 330:2527), en tanto que en la causa 10.507/10 se decidió de igual modo con respecto a la resolución que desestimó el pedido de la nulidad de una investigación y de su archivo, el cual fue deducido con sustento en vicios en la denuncia que la motivó y en la prueba acompañada con ella. Por último, ninguna relación guarda con este caso la resolución dictada en la causa 3839/10, en la cual se decidió que ni la CNDC ni el Secretario de Comercio Interior tienen facultades -como autoridad de aplicación transitoria hasta la constitución del TNDC- para dictar las medidas cautelares previstas en el art. 35 de la ley 25.156.

4. Ello aclarado, cabe señalar con relación al art. 53 de la ley 25.156, a su decreto reglamentario y a la doctrina de "Credit Suisse" -invocados para que el organismo administrativo procediera sin otro trámite a elevar el expediente a la Alzada en el plazo allí fijado (ver fs. 103/vta.)- que como se precisa en causa 2875/11 (ver resolución dictada en la fecha), no se advierte la necesidad de que este Tribunal se pronuncie acerca de las facultades de la Comisión o del Secretario de Comercio Interior para conceder o denegar la apelación interpuesta -práctica inveterada desde la sanción de la norma y cuyo fundamento normativo puede encontrarse en la última parte del art. 52 de la

LDC-, habida cuenta de que el recurso de queja permite la revisión judicial de ese acto mediante la intervención que se ha motivado por esa vía. Es decir, el pronunciamiento acerca de la procedencia formal del recurso no es definitivo ni susceptible de generarle un gravamen irreparable en ese aspecto, máxime cuando en cualquier caso es la Cámara el juez del recurso con facultades para disponer sobre su admisibilidad más allá de los actos cumplidos en la anterior instancia.

5. Los restantes argumentos tampoco son suficientes para admitir la queja deducida. La CNDC fundó la denegatoria de la apelación en los arts. 33 de la ley 25.156 y 7 del decreto 396/01 (ver fs. 94), a lo cual añadió que la omisión incurrida en la Resol. 38/10 respecto de la hora de inicio de la pericial contable fue subsanada mediante la Resol. 42/11, por lo que -concluyó- la Asociación carecía de gravamen (ver fs. 90).

En cambio, la recurrente limita el fundamento de la queja en que la mencionada Resol. 78/10 nunca quedó firme, por lo que, según entiende, resultan nulos todos los actos dictados con posterioridad.

Ahora bien, mediante la resolución dictada en la fecha en la causa 2875/10 esta Sala ha desestimado la queja deducida por la Asociación con motivo de que la CNDC denegó por Resol. 33/11 la apelación interpuesta contra la Resol. 4/11, en la que se rechazó la nulidad impetrada contra la referida Resol. 78/10. Es decir, en ningún momento se dictó acto administrativo o judicial alguno que abone la conclusión de la recurrente, máxime cuando expresamente la Comisión formó un incidente autónomo para que tramitara ese planteo (ver fs. 2346 del expediente S01:0060577/2003, cuya copia certificada se tiene a la vista). Adviértase, en ese sentido, que los efectos que invoca la Asociación con sustento en el art. 172 del Código Procesal Penal (fs. 103vta.), tienen como presupuesto la declaración de la nulidad, acto que nunca fue dictado.

6. Por otro lado, la recurrente no ha demostrado cuál es el concreto gravamen que le generó la Resol. 42/11. En efecto, cabe recordar que la constitución de los peritos en la sede de la Asociación -en el marco de la prueba ofrecida y proveída mediante Resol. 5/11 (fs. 2421/24 del expediente administrativo principal- fue dispuesta mediante la providencia del 8 de abril de 2011 para el 11-5-2011 a las 11:00 horas, en la que también se indicó que se designara el perito de parte en el término de cinco días (fs. 2428). Con motivo

del pedido de nulidad de dicha providencia, formulado por la Asociación (fs. 46/47 de esta queja) y desestimado por la CNDC en la Resol. 38/11 (del 11 de mayo, notificada el 16 de mayo; ver fs. 2441/vta. del principal), se pospuso en ese mismo acto la diligencia para el 26 de mayo, reiterándose que se designara el perito de parte en el plazo de cinco días (fs. 49/53). Contra esa resolución la Asociación pidió aclaratoria por no haberse indicado la hora de la diligencia, sin perjuicio de lo cual dedujo nulidad y recurso de apelación (fs. 56/62vta.). En la mencionada Resol. 42/11 del 24 de mayo, la Comisión aclaró que la diligencia se llevaría a cabo en la fecha indicada a las 11:00 horas y que en ese acto se podría designar al perito de parte.

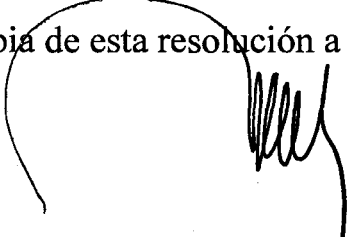
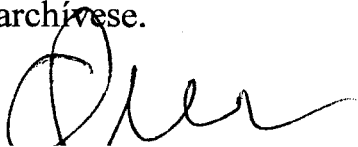
En tales circunstancias, el sólo hecho de que la hora se hubiera indicado sin mayor tiempo hábil antes del momento en que tendría lugar la diligencia, no es susceptible de generar por sí mismo, y sin otra explicación, un gravamen irreparable, máxime cuando tanto la fecha como el requerimiento para que la Asociación designase el perito de parte ya habían sido dispuestos en la Resol. 38/11, limitándose la CNDC en la Resol. 42/11 a aclarar la redacción del art. 2 de aquélla, indicando la hora -la cual resulta ser la misma que la originalmente fijada en la providencia del 8 de abril-, y estableciendo que la designación del perito de parte -dispuesta también en esa misma providencia- podía hacerse en la oportunidad de llevarse a cabo la diligencia.

En síntesis, la recurrente no ha demostrado que la apelación se hubiese interpuesto contra un acto definitivo o susceptible de generarle un gravamen irreparable que justifique ampliar los supuestos previstos en el art. 52 de la LDC, y de ese modo habilitar la revisión judicial allí prevista, de acuerdo con el criterio adoptado por esta Sala a partir de la causa 2929/02 del 15-8-2002 (ver, asimismo, causas 9628/02 del 29-10-2002, 1029/03 del 24-5-2004 y, en especial, la resolución dictada en la fecha en la causa 2875/11 citada).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:** desestimar la queja deducida por la Asociación.

El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, remítase copia de esta resolución a la CNDC mediante oficio y archívese.



Poder Judicial de la Nación

SALA CIVIL Y COMERCIAL N° 3

Registrado al N° 347 T° 3

DEL LIBRO DE SENTENCIAS



CARLOS A. PETRE
SECRETARIO

USO